

Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y el Reino de Bélgica

La República Argentina y el Reino de Bélgica, animados por el deseo de regular las relaciones recíprocas entre los dos Estados en el ámbito de la seguridad social, acuerdan lo siguiente:

TÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1 Definiciones

1. Para la aplicación del presente Convenio:

- a) El término "Estados contratantes" designa: a la República Argentina y al Reino de Bélgica.
- b) El término "Argentina" designa: la República Argentina;
El término "Bélgica" designa: el Reino de Bélgica.
- c) El término "nacional" designa: respecto de la Argentina: una persona de nacionalidad argentina.
Respecto de Bélgica: una persona de nacionalidad belga.
- d) El término "legislación" designa: las leyes, decretos, reglamentos y normas previstos en el Artículo 2.
- e) El término "Autoridad Competente" designa: En lo que respecta a la Argentina: al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o quien lo reemplace en sus competencias en el futuro.
En lo que respecta a Bélgica: a los Ministros competentes cada uno en su jurisdicción, de la aplicación de la legislación citada en el Artículo 2, inciso 1 B.
- f) El término "Institución Competente" designa: El Organismo o la autoridad encargada de aplicar, total o parcialmente, las legislaciones citadas en el Artículo 2.

- g) El término "Organismo de Enlace" designa: el Organismo de coordinación e información entre las Instituciones competentes de los dos Estados contratantes que intervengan en la aplicación del presente Convenio y en la información a los interesados sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo.
- h) El término "período de seguro" designa: cualquier período reconocido como tal por la legislación bajo la cual este período se haya cumplido, así como cualquier período reconocido por esta legislación como equivalente a un período de seguro.
- i) El término "prestación" designa: toda pensión o toda prestación en dinero o en especie previsto en las legislaciones mencionadas en el Artículo 2 del presente Convenio, incluyendo suplementos, incrementos o actualizaciones.

2. Todo término no definido en el numeral primero del presente Artículo, tiene el sentido que le es atribuido por la legislación que se aplica.

Artículo 2 Campo de aplicación material

1. El presente convenio se aplica:

- A. En lo que respecta a la Argentina, a las legislaciones relativas:
 - a) A las prestaciones contributivas de seguridad social, en lo que se refiere a las prestaciones derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia, administradas por organismos nacionales, provinciales de funcionarios públicos o profesionales y municipales;
 - y en lo que respecta al Título II solamente a las legislaciones relativas:
 - b) A la seguridad social de los trabajadores asalariados;
 - c) A la seguridad social de los trabajadores independientes.

- B. En lo que respecta a Bélgica, a las legislaciones relativas:
 - a) A las prestaciones de vejez y de sobrevivencia de los trabajadores asalariados y de los trabajadores independientes;
 - b) Al seguro de invalidez de los trabajadores asalariados, de los marinos de la marina mercante y de los trabajadores independientes;
 - y en lo que respecta al Título II solamente a las legislaciones relativas:
 - c) A la seguridad social de los trabajadores asalariados;
 - d) Al estatuto social de los trabajadores independientes.

2. Asimismo, el presente Convenio se aplicará a todos los actos legislativos o reglamentarios que modifiquen o complementen las legislaciones enumeradas en el numeral 1 del presente Artículo.

El presente Convenio se aplicará a los actos legislativos o reglamentarios que extiendan los regímenes existentes a nuevas categorías de beneficiarios, de no existir al respecto oposición del Estado contratante que modifique su legislación, notificada al otro Estado contratante en un plazo de seis meses a partir de la publicación oficial de dichos actos.

El presente Convenio no es aplicable a los actos legislativos o reglamentarios que establezcan una nueva rama de seguridad social, salvo que se celebre un acuerdo a tal efecto entre las Autoridades Competentes de los dos Estados contratantes.

Artículo 3 Campo de aplicación personal

Salvo que el presente Convenio disponga lo contrario, éste se aplicará a las personas, cualquiera sea su nacionalidad, que se encuentren sometidas o que hubieran adquirido derechos en virtud de las legislaciones mencionadas en el Artículo 2, así como a los derechohabientes, miembros de la familia y a los sobrevivientes de dichas personas.

Artículo 4 Igualdad de tratamiento

A menos que esté dispuesto de otra manera en el presente Convenio, las personas referidas en el Artículo 3, tienen las obligaciones y le corresponden los derechos previstos en la legislación de cada Estado contratante, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado.

Artículo 5 Exportación de las Prestaciones

1. A menos que se disponga de otra manera en el presente Convenio, las prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de uno de los Estados contratantes no pueden ser suspendidas ni sufrir ninguna reducción o modificación por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio del otro Estado contratante.

2. Las prestaciones de vejez y de sobrevivencia establecidas conforme a la legislación de uno de los Estados contratantes serán pagadas a los nacionales del otro Estado contratante que residan en el territorio de un tercer Estado en las mismas condiciones que si se tratara de nacionales del primer Estado que residen en el territorio de dicho tercer Estado.

3. Lo dispuesto en el inciso precedente, resultará también aplicable para las prestaciones por invalidez definitiva otorgadas por la Institución Competente argentina cuando sus titulares nacionales del otro Estado residan en un tercer Estado.

Artículo 6

Disposiciones de reducción o de suspensión

1. Toda disposición de reducción o de suspensión de una prestación prevista por la legislación de un Estado contratante, aplicable en caso de acumulación de una prestación con otras prestaciones de seguridad social o con otros ingresos o del hecho del ejercicio de una actividad laboral en el territorio de este Estado contratante, es igualmente aplicable a las prestaciones debidas en virtud de la legislación del otro Estado contratante o a los ingresos obtenidos o del producto de una actividad laboral ejercida en el territorio de este otro Estado contratante.

2. No obstante, para la aplicación de esta regla, no se tienen en cuenta las prestaciones de la misma naturaleza que son liquidadas por las instituciones competentes de los dos Estados contratantes, conforme a las disposiciones de los Artículos 12 y 16 del presente Convenio.

TÍTULO II

Disposiciones que determinan la Legislación aplicable

Artículo 7

Reglas generales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 8 a 10 del presente Convenio, la legislación aplicable se determina conforme a las siguientes disposiciones:

- a) La persona que ejerce una actividad laboral en el territorio de uno de los Estados contratantes se encuentra sometida a la legislación de dicho Estado;
- b) La persona que ejerce una actividad laboral a bordo de un navío de bandera de uno de los Estados contratantes se encuentra sometida a la legislación del Estado en el que tiene su residencia habitual;
- c) La persona que forma parte del personal de navegación de una empresa que efectúa, por cuenta de otros o por su propia cuenta, transporte aéreo internacional de pasajeros o de mercaderías y que tiene su sede en el territorio de uno de los Estados contratantes, se encuentra sometida a la legislación de este último Estado. Sin embargo, cuando la empresa tiene una sucursal o una representación permanente en el territorio del otro Estado contratante, el trabajador asalariado que ésta ocupa se encuentra sometido a la legislación del Estado contratante en cuyo territorio se encuentra la sucursal.

2. En caso de ejercicio simultáneo de una actividad profesional independiente en Bélgica y asalariada en la Argentina, la actividad ejercida en la Argentina se asimilará a una actividad asalariada ejercida en Bélgica, para la determinación de las obligaciones que resulten de la legislación belga relativa al estatuto social de los trabajadores independientes.

Artículo 8
Reglas particulares

1.

- a) El trabajador asalariado que, estando al servicio de una empresa que tenga en el territorio de uno de los Estados contratantes su sede principal o una sucursal en la que se desempeña normalmente, sea destinado temporalmente por esta empresa al territorio del otro Estado contratante para realizar allí un trabajo por cuenta de esta empresa, está sometido únicamente a la legislación del primer Estado contratante como si continuara siendo ocupado en su territorio, a condición de que la duración previsible del trabajo que debe realizar no exceda los veinticuatro meses y que no sea enviado en sustitución de otro trabajador al cumplirse el plazo de su traslado temporario.
- b) Las disposiciones del literal a) son igualmente aplicables a los miembros de la familia que acompañan al trabajador asalariado al territorio del otro Estado contratante, a menos que ellos ejerzan una actividad asalariada o independiente en el territorio de dicho Estado contratante.

2. Cuando el desplazamiento referido en el párrafo 1 del presente Artículo exceda los veinticuatro meses, las autoridades competentes de los dos Estados contratantes o las instituciones competentes designadas por aquellas pueden convenir que el trabajador asalariado quede únicamente sometido a la legislación del primer Estado contratante. No obstante esta prórroga no podrá darse para un período que exceda los treinta y seis meses. Esta prórroga deberá ser solicitada antes de que termine el período inicial de veinticuatro meses.

3. El párrafo 1 del presente Artículo resulta de aplicación cuando una persona enviada por su empleador desde el territorio de un Estado contratante al territorio de un tercer país luego es enviada del territorio de ese tercer país al territorio del otro Estado contratante por dicho empleador.

4. Cuando una persona se encuentra sujeta a la legislación de un Estado contratante en el que ejerce habitualmente una actividad independiente en el territorio de ese Estado contratante y que ejerza temporariamente una actividad independiente similar, únicamente en el territorio del otro Estado contratante, esta persona seguirá sujeta a la legislación del primer Estado, como si ella continuara trabajando en el territorio del primer Estado contratante, a condición

que la duración previsible de la actividad independiente en el territorio del otro Estado contratante no supere los veinticuatro meses.

5. En el caso de que la actividad independiente en el territorio del otro Estado contratante previsto en el inciso 5 del presente Artículo se prolongue más allá de los veinticuatro meses, las autoridades competentes de los dos Estados contratantes o las instituciones competentes designadas por estas autoridades competentes, podrán convenir que el trabajador independiente quede sometido únicamente a la legislación del primer Estado contratante. No obstante, esta prórroga no podrá otorgarse por un período que exceda los treinta y seis meses. Esta prórroga deberá ser solicitada antes de que termine el período inicial de veinticuatro meses.

6. En los casos previstos en los incisos 4 y 5 del presente Artículo, las personas comprendidas, deben acreditar previamente contar con cobertura de salud en el Estado de origen.

Artículo 9

Funcionarios, miembros de misiones diplomáticas y consulares

1. Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares estarán sujetos a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963.

2. Las personas contratadas por una Misión Diplomática o por una Oficina Consular de uno de los Estados contratantes en el territorio del otro Estado contratante están sometidas a la legislación de este último Estado.

Quando la misión diplomática o la oficina consular de uno de los Estados contratantes ocupa personas que están sometidas a la legislación del otro Estado contratante, la misión u oficina debe cumplir las obligaciones impuestas a los empleadores por la legislación de este último Estado contratante.

3. Las disposiciones del inciso 2 del presente Artículo son aplicables por analogía a las personas ocupadas en el servicio privado de una de las personas citadas en el inciso 1.

4. Las disposiciones de los incisos 1 a 3 del presente Artículo no son aplicables a los miembros honorarios de una oficina consular ni a las personas ocupadas en el servicio privado de estas personas.

5. Los funcionarios y el personal asimilado están sujetos a la legislación del Estado contratante bajo cuya Administración se desempeñan. Estas personas, así como los miembros de su familia, son considerados, a estos efectos, como residentes en el territorio de este Estado contratante, incluso si se encuentran en el otro territorio del Estado contratante.

6. Las disposiciones del presente Artículo son igualmente aplicables a los miembros de la familia que acompañen a las personas citadas en los incisos 1 y 5 que habiten en el territorio del país receptor, a menos que ejerzan ellos mismos una actividad laboral.

Artículo 10 Excepciones

Las Autoridades Competentes o la Institución Competente designada por aquéllas pueden establecer, de común acuerdo, en interés de ciertos asegurados o de ciertas categorías de asegurados, excepciones a las disposiciones de los Artículos 7 a 9.

TÍTULO III Disposiciones Relativas a las Prestaciones

Capítulo 1 Totalización - Reglas Generales

Artículo 11 Totalización de períodos de seguro

1. Sin perjuicio de las disposiciones del numeral 2 del presente Artículo, los períodos de seguro y los períodos asimilados cumplidos con arreglo a la legislación sobre prestaciones de uno de los Estados contratantes se totalizan, de ser necesario, con la condición de que no se superponga con los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación del otro Estado contratante, a efectos de adquirir, mantener o recuperar el derecho a las prestaciones.

Cuando dos períodos reconocidos como períodos asimilados a un período de seguro coincidan, sólo se tomará en cuenta el período cumplido en el Estado contratante donde el interesado ha trabajado antes de este período.

2. Cuando la legislación de cualquiera de los Estados contratantes subordine el otorgamiento de ciertas prestaciones a la condición de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos en una actividad determinada, solamente serán computados, para la admisión al beneficio de dichas prestaciones, los períodos de seguro cumplidos o reconocidos como equivalentes en la misma actividad en el otro Estado contratante.

3. Cuando la legislación de cualquiera de los Estados contratantes subordine el otorgamiento de ciertas prestaciones a la condición de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos en una actividad determinada y cuando estos períodos no pudieron dar derecho a dichas prestaciones, dichos períodos se considerarán como válidos para la liquidación de las prestaciones previstas por el régimen general en la Argentina y en lo concerniente a Bélgica, se aplicará únicamente al régimen general de los trabajadores asalariados.

Artículo 12
Cálculo de las Prestaciones

1. Cuando una persona cumpla con las condiciones requeridas por la legislación de uno de los dos Estados contratantes para tener derecho a las prestaciones sin necesidad de proceder a la totalización, la Institución Competente del Estado que corresponda calculará el derecho a la prestación directamente sobre la base de los períodos de seguro cumplidos en ese Estado contratante y solamente en función de su propia legislación.

Dicha Institución procederá también al cálculo del monto de la prestación que será obtenido por la aplicación del numeral 2 del presente Artículo. Solo se pagará el monto más elevado.

En el caso de Bélgica, el presente párrafo se aplica únicamente a las prestaciones de vejez y sobrevivencia.

2. Si una persona pretende una prestación a la que tendría derecho únicamente totalizando los períodos de seguro conforme al Artículo 11, se aplicarán las siguientes reglas:

- a) La Institución Competente correspondiente calculará el monto teórico de la prestación que se debería como si todos los períodos de seguro cumplidos en virtud de las legislaciones de los dos Estados contratantes hubieran sido realizados únicamente bajo la legislación que ella aplica;
- b) La Institución Competente correspondiente calculará posteriormente el monto debido, sobre la base del monto citado en el literal a), a prorrata de la duración de los períodos de seguro cumplidos solamente bajo su legislación, en relación a la duración de todos los períodos de seguro computados según el literal a).

3. El simple hecho de que el presente Convenio le resulte aplicable, no podrá tener como efecto reducir los derechos del interesado.

Artículo 13
Determinación de la Incapacidad

1. Para la determinación de la reducción del porcentaje de la capacidad laborativa a los fines del otorgamiento de las prestaciones correspondientes por invalidez, la institución competente de cada una de los Estados contratantes efectuará su evaluación conforme a la legislación que ella aplique.

2. A los fines de la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 anterior, la institución competente del Estado contratante en cuyo territorio resida el solicitante pondrá a

disposición de la Institución Competente del otro Estado, a su solicitud y en forma gratuita, los informes y documentos médicos que tenga en su poder.

3. A pedido de la institución competente del Estado contratante cuya legislación se aplique, la institución competente del Estado contratante en cuyo territorio resida el solicitante efectuará los exámenes médicos necesarios para la evaluación de la situación del solicitante. Los exámenes médicos que respondan únicamente al interés de la primera institución arriba mencionada serán asumidos íntegramente por ésta, según las modalidades establecidas en el acuerdo administrativo previsto en el Artículo 19.

Artículo 14

Nuevo cálculo de las prestaciones

1. Si en razón del aumento del costo de vida, de la variación del nivel de salarios o por otras razones, las prestaciones de vejez, de sobrevivencia o de invalidez de uno de los Estados contratantes sufren una modificación en un porcentaje o en un monto determinado, no corresponde proceder a un nuevo cálculo de las prestaciones de vejez, sobrevivencia o invalidez.

2. Por el contrario, en caso de modificación del modo de establecer las prestaciones de vejez, sobrevivencia o invalidez, o de variación de sus reglas de cálculo, se realizará un recálculo conforme a los Artículos 12 ó 16.

Capítulo 2

Aplicación de la Legislación Belga

Artículo 15

Para la adquisición, mantenimiento o recuperación del derecho a las prestaciones de invalidez, las disposiciones del Artículo 11 se aplican por analogía.

Artículo 16

1. Si el derecho a las prestaciones belgas de invalidez nace únicamente por la totalización de los períodos de seguro argentinos y belgas efectuados conforme al Artículo 15, el monto de la prestación debida está determinado según las modalidades establecidas por el Artículo 12, numeral 2.

2. Cuando el derecho a las prestaciones belgas de invalidez nace sin que sea necesario recurrir a las disposiciones del Artículo 15 y que el monto resultante de la suma de la prestación argentina y de la prestación belga calculada según el numeral 1 del presente Artículo sea inferior al monto de la prestación debida, sobre la base únicamente de la legislación belga, la Institución Competente belga habilitará un complemento igual a la diferencia entre la suma de las dos prestaciones precitadas y el monto debido en virtud únicamente de la legislación belga.

Artículo 17

No obstante las disposiciones del Artículo 15, en los casos citados en el Artículo 16 numeral 1, ninguna prestación de invalidez es debida por Bélgica cuando los períodos de seguro cumplidos bajo su legislación, con anterioridad a la verificación del riesgo, no alcancen, en su conjunto, un año.

Artículo 18

Como excepción a lo dispuesto en el Artículo 5 del presente Convenio, el titular de una prestación de invalidez de la legislación belga conserva el beneficio de esta prestación en el curso de una estadía en el otro Estado, cuando esta estadía haya sido previamente autorizada por la Institución Competente belga. Sin embargo, esta autorización sólo puede ser rechazada cuando la estadía ocurra en el período en el cual, en virtud de la legislación belga, la Institución Competente belga deba proceder a la evaluación o a la revisión del estado de invalidez.

TÍTULO IV Disposiciones Varias

Artículo 19

Atribuciones de las Autoridades Competentes

Las Autoridades Competentes:

- a) toman, mediante acuerdo administrativo, las medidas necesarias para la aplicación del presente Convenio y designan los Organismos de Enlace y las Instituciones Competentes;
- b) definen los procedimientos de ayuda mutua administrativa, incluido el reparto de los gastos relacionados con la obtención de certificados médicos, administrativos y cualquier otro, necesarios para la aplicación del presente Convenio;
- c) se comunican directamente las informaciones relativas a medidas tomadas para la aplicación del presente Convenio;
- d) se comunican en los más breves plazos y directamente, cualquier modificación de su legislación susceptible de afectar la aplicación del presente Convenio.

Artículo 20 Cooperación administrativa

1. Para la aplicación del presente Convenio, las Autoridades Competentes así como las Instituciones Competentes de cada uno de los Estados contratantes se prestan recíprocamente sus buenos oficios, como si se tratara de la aplicación de su propia legislación. Esta ayuda mutua es en principio gratuita; de todos modos, las Autoridades Competentes pueden convenir el reembolso de determinados gastos.

2. El beneficio de las exenciones o de reducciones de impuestos, de timbres, actuariales, o de registro previstos por la legislación de uno de los Estados contratantes para los certificados o documentos que se expidan o extiendan en aplicación de la legislación de dicho Estado, se extenderá a los certificados y documentos análogos expedidos o extendidos en aplicación de la legislación del otro Estado.

3. Las actas y documentos que se expidan o extiendan en aplicación del presente Convenio están exonerados de las visas de legalización de las Autoridades diplomáticas o consulares.

4. Para la aplicación del presente Convenio, las Autoridades Competentes y los Organismos de Enlace de los Estados contratantes están habilitados a comunicarse directamente entre sí. Las comunicaciones podrán realizarse en cualquiera de los idiomas oficiales de los Estados contratantes.

Artículo 21 Comunicación de datos personales

1. Las instituciones de los dos Estados contratantes están autorizadas a comunicarse, a los efectos de la aplicación del presente Convenio, datos personales, incluso datos relativos a los ingresos de las personas que la institución de un Estado contratante necesita conocer para la aplicación de una legislación de seguridad social o de asistencia social.

2. La comunicación de datos personales por la institución de un Estado contratante está sometida al amparo de la legislación en materia de protección de los datos de este Estado contratante.

3. La conservación, el proceso o la difusión de datos personales por la institución del Estado contratante a la que éstos son comunicados están sometidos a la legislación en materia de protección de los datos de este Estado contratante.

4. Los datos referidos en el presente Artículo no pueden utilizarse para fines ajenos a la aplicación de las legislaciones relativas a la seguridad social o a la asistencia social.

Artículo 22 Solicitudes, declaraciones y recursos

Las solicitudes, declaraciones o recursos que deberían haber sido presentados, según la legislación de uno de los Estados contratantes, en un plazo determinado ante una autoridad, un organismo o una jurisdicción de dicho Estado, se considerarán como presentadas en el mismo plazo ante una autoridad, organismo o jurisdicción del otro Estado contratante. En dicho caso, la autoridad, organismo o jurisdicción receptor transmitirá sin demora dichas solicitudes,

declaraciones o recursos a la autoridad, al organismo o a la jurisdicción del primer Estado contratante, sea directamente, sea por intermedio de las Autoridades Competentes de los Estados contratantes. La fecha de presentación de dichas demandas, declaraciones o recursos ante una autoridad, organismo o jurisdicción del otro Estado contratante se considera como la fecha de presentación ante la autoridad, organismo o jurisdicción competente para conocer.

Una solicitud o un documento no pueden ser rechazados por haber sido redactado en un idioma oficial del otro Estado contratante para conocer.

Artículo 23 Pago de las prestaciones

Los Organismos deudores de las prestaciones como consecuencia del presente Convenio las pagarán válidamente en la moneda de su propio Estado.

Las transferencias que resulten de la aplicación del presente Convenio se realizan conforme a los acuerdos vigentes en esta materia entre los dos Estados contratantes.

Las disposiciones de la legislación de un Estado contratante en materia de control de cambios no pueden ser un obstáculo a la libre transferencia de los montos financieros resultantes de la aplicación del presente Convenio.

Artículo 24 Resolución de diferendos

Los diferendos relativos a la interpretación y a la ejecución del presente Convenio serán resueltos, en la medida de lo posible, por las Autoridades Competentes.

Artículo 25 Procedimiento de ejecución

1. Las resoluciones ejecutorias dictadas por un tribunal de uno de los Estados contratantes, al igual que los actos ejecutorios dictados por la autoridad o la institución de uno de los Estados contratantes, relativos a cotizaciones o contribuciones de seguridad social y a otras solicitudes, particularmente de recuperación de prestaciones indebidas, son reconocidos en el territorio del otro Estado contratante.

2. El reconocimiento sólo puede rechazarse cuando es incompatible con los principios legales del Estado contratante en cuyo territorio la resolución o el acto tiene que ejecutarse.

3. El procedimiento de ejecución de las resoluciones y los actos que han adquirido firmeza tiene que estar en conformidad con la legislación que regula la ejecución de dichas resoluciones y actos del Estado contratante en cuyo territorio la ejecución tiene lugar. La resolución o el acto ha de ir acompañado por un certificado que testifique su carácter ejecutorio.

4. Las cotizaciones y contribuciones debidas tienen, en el marco de un procedimiento de ejecución, de quiebra o de liquidación forzosa en el territorio del otro Estado contratante, el mismo orden de prioridad que los créditos equivalentes en el territorio de este Estado contratante.

5. Los créditos que han de ser objeto de cobro o un recupero forzoso son protegidos por los mismos privilegios y garantías que los créditos de la misma naturaleza de una institución ubicada en el territorio del Estado contratante donde el cobro o el recupero forzoso tenga lugar.

Artículo 26

Recuperación de pagos indebidos

Cuando la institución de uno de los Estados haya pagado a un beneficiario una suma que exceda la suma a la que éste tiene derecho, esta institución puede, en las condiciones y dentro de los límites previstos por la legislación que ésta aplica, pedir a la institución del otro Estado deudor de prestaciones a favor de este beneficiario que retenga el importe pagado en exceso de las sumas que ésta paga a dicho beneficiario. Esta última institución efectuará la retención en las condiciones y dentro de los límites previstos para tal compensación por la legislación que ésta aplica como si se tratara de sumas pagadas en exceso por ella misma y transferirá el importe retenido a la institución acreedora.

Artículo 27

Cooperación en materia de lucha contra los fraudes

Además de la aplicación de los principios generales de cooperación administrativa, las Autoridades competentes convendrán, en acuerdo administrativo, las modalidades según las cuales éstas se prestan ayuda para luchar contra los fraudes que traspasen las fronteras de un Estado contratante en materia de pago de cotizaciones y de prestaciones de seguridad social, en particular en lo relativo a la residencia efectiva de las personas, la apreciación de los recursos, el cálculo de las cotizaciones y las acumulaciones de prestaciones.

TÍTULO V
Disposiciones Transitorias y Finales

Artículo 28
Contingencias anteriores a la entrada en vigor del Convenio

1. El presente Convenio se aplica igualmente a las contingencias que tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigor.
2. El presente Convenio no otorga derecho a percepción de prestaciones referentes a un período anterior a su entrada en vigor.
3. Todo período de seguro cumplido bajo la legislación de uno de los Estados contratantes antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, se toma en consideración para la determinación del derecho a una prestación otorgada conforme a las disposiciones de este Convenio.
4. Este Convenio no se aplica a los derechos que han sido liquidados definitivamente por una indemnización preestablecida o por el reembolso de cotizaciones.

Artículo 29
Revisión, prescripción, caducidad

1. Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida por causa de la nacionalidad del interesado o en razón de su residencia en el territorio del Estado contratante distinto de aquel en que se encuentra el Organismo deudor, se liquidará o restablecerá a solicitud del interesado a partir de la entrada en vigor del presente Convenio.
2. Los derechos de los interesados que hayan obtenido, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Convenio, la liquidación de una prestación, serán revisados a su solicitud, teniendo en cuenta las disposiciones de este Convenio. Una revisión de estas características en ningún caso debe tener como consecuencia una reducción de los derechos anteriores de los interesados.
3. Si la solicitud mencionada en los incisos 1 ó 2 del presente Artículo es presentada dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Convenio, los derechos otorgados conforme a las disposiciones de este Convenio son adquiridos a partir de dicha fecha, sin que las disposiciones de la legislación de uno u otro de los Estados contratantes, relativas a la caducidad o a la prescripción de los derechos, sean oponibles a los interesados.
4. Si la solicitud mencionada en los incisos 1 ó 2 del presente Artículo es presentada después de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente Convenio, los derechos que no son alcanzados por la caducidad o que no hayan prescrito, serán adquiridos a partir de la fecha de la solicitud, a excepción de disposiciones más favorables de la legislación del correspondiente Estado contratante.

Artículo 30

Duración

El presente Convenio tendrá una duración indeterminada. Podrá ser denunciado por uno de los Estados contratantes mediante notificación escrita dirigida al otro Estado contratante, por la vía diplomática, con un preaviso de doce meses.

Artículo 31

Garantía de derechos adquiridos o en vías de adquisición

En caso de denuncia del presente Convenio, se mantendrán los derechos y pagos de prestaciones adquiridas en virtud del Convenio. Los Estados contratantes tomarán sus recaudos en lo que respecta a los derechos en vías de adquisición.

Artículo 32

Entrada en vigor

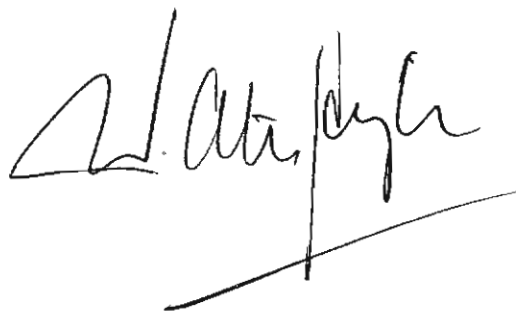
El presente Convenio será ratificado conforme a la legislación interna de cada uno de los Estados contratantes. El mismo entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que ambos Estados contratantes hayan intercambiado, por vía diplomática, los instrumentos de ratificación.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Buenos Aires, el 3 de marzo de 2010, en dos ejemplares, en idiomas castellano, francés y neerlandés siendo los tres textos igualmente auténticos.

Por la República Argentina

Por el Reino de Bélgica



Convention sur la Sécurité Sociale entre la République Argentine et le Royaume de Belgique

La République Argentine et le Royaume de Belgique, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Dispositions générales

Article 1 Définitions

- 1 Pour l'application de la présente Convention:
 - a) Le terme «Etats contractants» désigne: la République Argentine et le Royaume de Belgique.
 - b) Le terme «Argentine» désigne: la République Argentine;
Le terme «Belgique» désigne: le Royaume de Belgique.
 - c) Le terme «ressortissant» désigne:
En ce qui concerne l'Argentine: une personne de nationalité argentine;
En ce qui concerne la Belgique: une personne de nationalité belge.
 - d) Le terme «législation» désigne: les lois et règlements visés à l'article 2.
 - e) Le terme «autorité compétente» désigne:
En ce qui concerne l'Argentine: Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale ou celui qui aura la compétence dans l'avenir.
En ce qui concerne la Belgique: les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1 B.
 - f) Le terme «institution compétente» désigne:
l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2.

- g) Le terme «organisme de liaison» désigne: l'organisme de coordination et d'information entre les institutions compétentes des deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la présente Convention et dans l'information des personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent.
- h) Le terme «période d'assurance» désigne: toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.
- i) Le terme «prestation» désigne: toute pension ou toute prestation en espèces ou en nature prévue en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, majorations ou indexations.

2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

Article 2 Champ d'application matériel

1. La présente Convention s'applique:

A. En ce qui concerne l'Argentine, aux législations relatives:

- a) aux prestations contributives de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations qui découlent de contingences de vieillesse, d'invalidité et de survie, gérées par les organismes nationaux, provinciaux de fonctionnaires publics ou professionnels, municipaux; et en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives:
- b) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- c) à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

B. En ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives:

- a) aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;
- b) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives:
- c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- d) au statut social des travailleurs indépendants.

2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de

bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

Article 3 Champ d'application personnel

A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations mentionnées à l'article 2, ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de la famille et aux survivants des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 4 Egalité de traitement

A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations

1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2. Les prestations de vieillesse et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
3. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux prestations pour invalidité définitive octroyées par l'institution compétente argentine quand les titulaires ressortissants de l'autre Etat résident dans un Etat tiers.

Article 6
Clauses de réduction ou de suspension

1. Toute clause de réduction ou de suspension de prestation prévue par la législation d'un Etat contractant, applicable en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet Etat contractant, est également applicable aux prestations dues en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou aux revenus obtenus ou du produit d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la présente Convention.

TITRE II
Dispositions déterminant la Législation applicable

Article 7
Règles générales

1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:

- a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;
- b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de l'Etat dans lequel il a sa résidence habituelle;
- c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve.

2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Argentine, l'activité exercée en Argentine est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.

Article 8
Règles particulières

1.

- a) Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.
- b) Les dispositions du littéra a) sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre Etat contractant, à moins qu'ils n'exercent une activité salariée ou indépendante sur le territoire de cet Etat contractant.

2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1 du présent article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.

3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant.

4. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat contractant et qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois.

5. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant visée au paragraphe 4 du présent article se poursuit au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à

la législation du premier Etat contractant. Toutefois, cette prolongation ne peut être accordée pour une période excédant trente-six mois. Elle doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.

6. Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les personnes concernées doivent préalablement prouver être couvertes en matière de soins de santé dans l'Etat d'envoi.

Article 9
Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et
des postes consulaires

1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat contractant.

Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat contractant.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.

5. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent sur le territoire de l'autre Etat contractant.

6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille accompagnant les personnes visées aux paragraphes 1 et 5, qui vivent sur le territoire de l'Etat contractant d'accueil, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle.

Article 10 Dérogations

Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9.

TITRE III Dispositions Concernant les Prestations

CHAPITRE 1 Totalisation - Règles Générales

Article 11 Totalisation des périodes d'assurance

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées, accomplies conformément à la législation sur les prestations de l'un des Etats contractants, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.

Lorsque deux périodes reconnues comme périodes assimilées à une période d'assurance coïncident, seule la période accomplie dans l'Etat contractant où l'intéressé a travaillé avant cette période, est prise en compte.

2. Lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession dans l'autre Etat contractant.

3. Lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général pour l'Argentine et par le régime général des travailleurs salariés pour la Belgique.

Article 12 Calcul des prestations

1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation de l'un des deux Etats contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de l'Etat concerné calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans cet Etat contractant et uniquement en fonction de sa propre législation.

Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.

En ce qui concerne la Belgique, le présent paragraphe est uniquement applicable aux prestations de vieillesse et de survie.

2. Si une personne peut prétendre à une prestation à laquelle elle a droit uniquement compte tenu de la totalisation des périodes effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent:

- a) l'institution compétente concernée calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;
- b) l'institution compétente concernée calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a).

3. Le simple fait que la présente Convention lui est applicable ne peut avoir pour effet de réduire les droits de l'intéressé.

Article 13 Détermination de l'invalidité

1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Etats contractants effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.

2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Etat, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.

3. A la demande de l'institution compétente de l'Etat contractant dont il est fait application de la législation, l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel réside le demandeur effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur. Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution susmentionnée sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 19.

Article 14
Nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité de l'un des Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l'autre Etat contractant ne doit pas procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul est effectué conformément aux articles 12 ou 16.

Chapitre 2
Application de la Legislation Belge

Article 15

Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.

Article 16

1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance argentines et belges effectuées conformément à l'article 15, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 12, paragraphe 2.

2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 15, et que le montant résultant de l'addition de la prestation argentine et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1 du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge.

Article 17

Nonobstant les dispositions de l'article 15, dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, aucune prestation d'invalidité n'est due par la Belgique lorsque les périodes d'assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année.

Article 18

Par dérogation à l'article 5 de la présente Convention, le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

TITRE IV Dispositions Diverses

Article 19 Missions des autorités compétentes

Les autorités compétentes:

- a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les institutions compétentes;
- b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;
- c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
- d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention.

Article 20 Collaboration administrative

1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.

3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 21

Communication de données à caractère personnel

1. Les institutions des deux Etats contractants sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.

2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.

3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.

4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que à l'application des législations relatives à la sécurité sociale ou l'assistance sociale.

Article 22

Demandes, déclarations et recours

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat

contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 23 Paiement des prestations

Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention les payeront valablement dans la monnaie de leur Etat.

Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.

Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.

Article 24 Règlement des différends

Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.

Article 25 Procédures d'exécution

1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'une des Etats contractants, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'institution de l'un des Etats contractants, relatifs à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations iniques, sont reconnus sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision ou l'acte doit être exécuté.
3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution a lieu. La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire.

4. Les cotisations et contributions dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.

5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'une institution située sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.

Article 26 Recouvrement de paiements indus

Lorsque l'institution de l'un des Etats a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

Article 27 Coopération en matière de lutte contre les fraudes

Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes qui dépassent les frontières d'un Etat contractant en matière de cotisations et de prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.

TITRE V Dispositions Transitoires et Finales

Article 28 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite Convention.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.

Article 29

Révision, prescription, déchéance

1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

3. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.

4. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant concerné.

Article 30

Durée

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec un préavis de douze mois.

Article 31
Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition

En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 32
Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux Etats contractants ont échangé, par voie diplomatique, les instruments de ratification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Buenos Aires, le 3 mars 2010, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Pour la République Argentine

Pour le Royaume de Belgique



Ontwerp Van Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Republiek Argentinië en het Koninkrijk België

De Republiek Argentinië en het Koninkrijk België, beziel met het verlangen de wederzijdse betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen, zijn de hierna volgende bepalingen overeengekomen:

TITEL I Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst:
 - a) Verstaat men onder "Overeenkomstsluitende Staten": de Republiek Argentinië en het Koninkrijk België.
 - b) Verstaat men onder "Argentinië": de Republiek Argentinië;
Verstaat men onder "België": het Koninkrijk België.
 - c) Verstaat men onder "onderdaan":
Voor Argentinië: een persoon van Argentijnse nationaliteit.
Voor België: een persoon van Belgische nationaliteit;
 - d) Verstaat men onder "wetgeving": de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 2.
 - e) Verstaat men onder "bevoegde autoriteit":
Voor Argentinië: het Ministerie van Arbeid, Tewerkstelling en Sociale Zekerheid of het Ministerie dat bevoegd zal zijn in de toekomst;
Voor België: de Ministers die, ieder wat hem betreft, belast zijn met de uitvoering van de wetgeving bedoeld in artikel 2, paragraaf 1 B.
 - f) Verstaat men onder "bevoegde instelling": het orgaan dat of de autoriteit die ermee belast is de in artikel 2 bedoelde wetgevingen geheel of gedeeltelijk toe te passen.

- g) Verstaat men onder "verbindingsorgaan": het orgaan dat zorgt voor de coördinatie en de informatie tussen de bevoegde instellingen van de beide overeenkomstsluitende Staten die betrokken zijn bij de toepassing van deze Overeenkomst en bij het informeren van de betrokken personen op het vlak van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.
- h) Verstaat men onder "verzekeringstijdvak": elke periode die als dusdanig wordt erkend bij de wetgeving onder dewelke dit tijdvak werd vervuld, alsook elke periode die bij deze wetgeving wordt erkend als gelijkgesteld aan een verzekeringstijdvak.
- i) Verstaat men onder "prestatie": gelijk welk pensioen of gelijk welke uitkering of verstrekking waarin is voorzien krachtens de wetgevingen bedoeld in artikel 2 van deze Overeenkomst, met inbegrip van alle aanvullingen, verhogingen of indexeringen.

2. Elke term die niet is gedefinieerd in paragraaf 1 van dit artikel heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving die van toepassing is.

Artikel 2 Materiële werkingsfeer

1. Deze Overeenkomst is van toepassing:
 - A. In Argentinië, op de wetgevingen betreffende:
 - a) de op bijdragebetaling berustende prestaties van de sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overleving, beheerd door de nationale organen, de provinciale organen voor overheidsambtenaren of vakmensen en de gemeentelijke organen;en, enkel wat Titel II betreft, op de wetgevingen betreffende:
 - b) de sociale zekerheid voor werknemers;
 - c) de sociale zekerheid voor zelfstandigen.
 - B. In België, op de wetgevingen betreffende:
 - a) de ouderdoms- en overlevingspensioenen van werknemers en zelfstandigen;
 - b) de invaliditeitsuitkeringen van de werknemers, de zeelieden ter koopvaardij en de zelfstandigen;en, enkel wat Titel II betreft, op de wetgevingen betreffende:
 - c) de sociale zekerheid voor werknemers;
 - d) het sociaal statuut van de zelfstandigen.
2. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op alle wetgevende of reglementaire akten die de in paragraaf 1 van dit artikel vermelde wetgevingen zullen wijzigen of aanvullen.

Deze Overeenkomst is ook van toepassing op de wetgevende of reglementaire akten waarbij de bestaande regelingen tot nieuwe

categorieën van gerechtigden uitgebreid zullen worden, indien de overeenkomstsluitende Staat die zijn wetgeving heeft gewijzigd zich daartegen niet verzet; in geval van verzet moet dit binnen een termijn van zes maanden met ingang van de officiële bekendmaking van bedoelde akten aan de andere overeenkomstsluitende Staat betekend worden.

Deze Overeenkomst is niet van toepassing op de wetgevende of reglementaire akten die een nieuwe tak van de sociale zekerheid instellen, behalve indien te dien einde tussen de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten een akkoord wordt getroffen.

Artikel 3 Persoonlijke werkingssfeer

Tenzij deze Overeenkomst anders bepaalt, is ze van toepassing op de personen, ongeacht hun nationaliteit, op wie de wetgevingen vermeld in artikel 2, van toepassing zijn of die krachtens die wetgevingen rechten hebben verworven, alsmede op hun rechthebbenden, hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen.

Artikel 4 Gelijke behandeling

Tenzij er in deze Overeenkomst anders over bepaald is, hebben de in artikel 3 bedoelde personen de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van elke overeenkomstsluitende Staat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van deze Staat.

Artikel 5 Uitvoer van prestaties

1. Tenzij er in deze Overeenkomst anders over bepaald is, mogen de prestaties verworven krachtens de wetgeving van een van beide overeenkomstsluitende Staten, niet geschorst noch verminderd of gewijzigd worden op grond van het feit dat de gerechtigde verblijft of woont op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat.

2. De ouderdoms- en overlevingsprestaties die krachtens de wetgeving van een van de overeenkomstsluitende Staten verschuldigd zijn, worden aan de onderdanen van de andere Staat die wonen op het grondgebied van een derde Staat uitbetaald onder dezelfde voorwaarden als gold het onderdanen van eerstgenoemde Staat die wonen op het grondgebied van deze derde Staat.

3. De bepalingen van de vorige paragraaf gelden eveneens voor de prestaties voor blijvende invaliditeit toegekend door de bevoegde Argentijnse instelling wanneer de gerechtigden die onderdaan zijn van de andere Staat in een derde Staat wonen.

Artikel 6 Verminderings- of schorsingsclausules

1. Elke bepaling inzake vermindering of schorsing van een prestatie waarin de wetgeving van een van de overeenkomstsluitende Staten voorziet en die van toepassing is in geval van samenloop van een prestatie met andere prestaties van sociale zekerheid of met andere inkomsten of door het feit van de uitoefening van beroepsarbeid op het grondgebied van deze overeenkomstsluitende Staat, is eveneens van toepassing op de prestaties verschuldigd krachtens de wetgeving van de andere overeenkomstsluitende Staat of op de inkomsten uit of de winst van een beroepsactiviteit uitgeoefend op het grondgebied van deze andere overeenkomstsluitende Staat.

2. Voor de toepassing van deze regel wordt er evenwel geen rekening gehouden met gelijkaardige prestaties die worden uitbetaald door de bevoegde organen van de beide overeenkomstsluitende Staten, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 12 en 16 van deze Overeenkomst.

TITEL II Bepalingen Betreffende de Toepasselijke Wetgeving

Artikel 7 Algemene regels

1. Onder voorbehoud van artikelen 8 tot 10 van deze Overeenkomst, wordt de toepasselijke wetgeving bepaald overeenkomstig de hierna volgende bepalingen:

- a) op de persoon die een beroepsactiviteit verricht op het grondgebied van een overeenkomstsluitende Staat is de wetgeving van deze Staat van toepassing;
- b) op de persoon die loonarbeid verricht aan boord van een schip dat onder de vlag vaart van een overeenkomstsluitende Staat is de wetgeving van de Staat waar hij zijn gebruikelijke woonplaats heeft van toepassing;
- c) op de persoon die deel uitmaakt van het vliegend personeel van een onderneming die voor rekening van een derde of voor eigen rekening internationaal luchtvervoer van passagiers of goederen verricht en wier zetel gevestigd is op het grondgebied van een overeenkomstsluitende Staat is de wetgeving van deze Staat van

toepassing. Wanneer de onderneming echter een filiaal of een permanente vertegenwoordiging heeft op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, is op de werknemers die ze tewerkstelt de wetgeving van de overeenkomstsluitende Staat op het grondgebied waarvan dit filiaal of deze permanente vertegenwoordiging zich bevindt van toepassing.

2. In geval van gelijktijdige uitoefening van een zelfstandige beroepsbezigheid in België en loonarbeid in Argentinië, wordt de activiteit uitgeoefend in Argentinië, voor de vaststelling van de verplichtingen voortvloeiend uit de Belgische wetgeving betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen, gelijkgesteld met loonarbeid in België.

Artikel 8 Bijzondere regels

1.
 - a) De werknemer die, in dienst zijnde van een onderneming die op het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende Staten haar hoofdzetel of een filiaal heeft, waaronder hij normaal ressorteert, door deze onderneming tijdelijk wordt gedetacheerd naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat om er een werk uit te voeren voor rekening van deze onderneming, valt enkel onder de toepassing van de wetgeving van de eerste overeenkomstsluitende Staat, alsof hij werkzaam bleef op diens grondgebied, op voorwaarde dat de te verwachten duur van het door hem uit te voeren werk geen vierentwintig maanden overschrijdt en dat hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere werknemer wiens detachingsperiode is afgelopen.
 - b) De bepalingen van littera a) zijn eveneens van toepassing op de gezinsleden die deze werknemer vergezellen op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, tenzij ze loonarbeid of een zelfstandige beroepsbezigheid uitoefenen op het grondgebied van deze overeenkomstsluitende Staat.
2. Wanneer de in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde detachering langer duurt dan 24 maanden, kunnen de bevoegde autoriteiten van beide overeenkomstsluitende Staten of de bevoegde instellingen aangeduid door deze bevoegde autoriteiten overeenkomen dat enkel de wetgeving van de eerste overeenkomstsluitende Staat van toepassing blijft op de werknemer. Deze verlenging mag evenwel niet worden toegekend voor een periode van meer dan zesendertig maanden en moet worden aangevraagd voor het einde van de aanvankelijke periode van vierentwintig maanden.
3. Paragraaf 1 van dit artikel is van toepassing wanneer een persoon, nadat hij door zijn werkgever van het grondgebied van een overeenkomstsluitende Staat naar het grondgebied van een derde land

is gestuurd, door deze werkgever van het grondgebied van het derde land naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat wordt gestuurd.

4. Wanneer een persoon op wie de wetgeving van een overeenkomstsluitende Staat van toepassing is en die gewoonlijk als zelfstandige werkt op het grondgebied van deze overeenkomstsluitende Staat, tijdelijk een gelijkaardige zelfstandige activiteit uitoefent, enkel op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, is op deze persoon enkel de wetgeving van de eerste Overeenkomstsluitende Staat van toepassing, alsof deze persoon werkzaam bleef op het grondgebied van de eerste overeenkomstsluitende Staat, op voorwaarde dat de te verwachten duur van de zelfstandige activiteit op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat geen vierentwintig maanden overschrijdt.
5. Wanneer de in paragraaf 4 van dit artikel bedoelde zelfstandige activiteit langer duurt dan 24 maanden, kunnen de bevoegde autoriteiten van beide overeenkomstsluitende Staten of de bevoegde instellingen aangeduid door deze bevoegde autoriteiten overeenkomen dat enkel de wetgeving van de eerste overeenkomstsluitende Staat van toepassing blijft op de zelfstandige. Deze verlenging mag evenwel niet worden toegekend voor een periode van meer dan zesendertig maanden en moet worden aangevraagd voor het einde van de aanvankelijke periode van vierentwintig maanden.
6. In de gevallen bedoeld in paragrafen 4 en 5 van dit artikel, moeten de betrokken personen vooraf bewijzen dat ze verzekerd zijn voor geneeskundige verzorging in de Zendstaat.

Artikel 9

Ambtenaren, leden van diplomatieke missies en consulaire posten

1. Op de personeelsleden van de diplomatieke missies en consulaire posten zijn de bepalingen van de Conventie van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen van 18 april 1961 en van de Conventie van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24 april 1963 van toepassing.
2. De personen die in dienst zijn genomen door een diplomatieke missie of een consulaire post van een van de overeenkomstsluitende Staten op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, zijn onderworpen aan de wetgeving van laatstgenoemde overeenkomstsluitende Staat.

Wanneer de diplomatieke missie of de consulaire post van een van de overeenkomstsluitende Staten personen tewerkstelt die onderworpen zijn aan de wetgeving van de andere overeenkomstsluitende Staat, moet de missie of de

post rekening houden met de verplichtingen die de wetgeving van laatstgenoemde overeenkomstsluitende Staat de werkgevers oplegt.

3. De bepalingen van paragraaf 2 van dit artikel zijn naar analogie toepasselijk op de personen die tewerkgesteld zijn in private dienst van een persoon bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel.

4. De bepalingen van paragrafen 1 tot 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op de ereleden van een consulaire post noch op de personen tewerkgesteld in private dienst van deze personen.

5. Op de ambtenaren en het gelijkgesteld personeel is de wetgeving van toepassing van de overeenkomstsluitende Staat waaronder de administratie valt die hen tewerkstelt. Deze personen worden, met het oog hierop, beschouwd als wonend op het grondgebied van deze overeenkomstsluitende Staat, zelfs indien ze zich op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat bevinden.

6. De bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk op de gezinsleden van de personen bedoeld in paragrafen 1 en 5, die op het grondgebied van de ontvangende overeenkomstsluitende Staat wonen, tenzij ze zelf een beroepsactiviteit uitoefenen.

Artikel 10 Afwijkingen

In het belang van bepaalde verzekerden of categorieën van verzekerden kunnen de bevoegde autoriteiten of de door deze autoriteiten aangewezen instelling, na gemeen overleg, voorzien in afwijkingen van de bepalingen van artikelen 7 tot 9.

TITEL III Bepalingen Betreffende De Prestaties

Hoofdstuk 1 Samentelling - Algemene Regels

Artikel 11 Samentelling van de verzekeringstijdvakken

1. Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 2 van dit artikel worden, voor het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op prestaties, de verzekeringstijdvakken en de gelijkgestelde periodes, vervuld overeenkomstig de wetgeving betreffende de prestaties van een van de overeenkomstsluitende Staten, in de nodige mate samengeteld met de verzekeringstijdvakken vervuld onder de wetgeving van de andere overeenkomstsluitende Staat, op voorwaarde dat zij elkaar niet overlappen.

Wanneer twee periodes die erkend zijn als periodes gelijkgesteld aan een verzekeringstijdvak samenvallen, wordt enkel de periode vervuld in de overeenkomstsluitende Staat waar de betrokkene werkte voor deze periode in aanmerking genomen.

2. Wanneer de wetgeving van een van beide overeenkomstsluitende Staten de toekenning van bepaalde prestaties afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de verzekeringstijdvakken in een bepaald beroep werden vervuld, worden, voor het genieten van deze prestaties, slechts de verzekeringstijdvakken samengeteld die in hetzelfde beroep in de andere overeenkomstsluitende Staat werden vervuld of als gelijkwaardig erkend zijn.

3. Wanneer de wetgeving van een van beide overeenkomstsluitende Staten de toekenning van bepaalde prestaties afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de verzekeringstijdvakken in een bepaald beroep werden vervuld en wanneer deze tijdvakken geen recht op deze prestaties hebben kunnen geven, worden deze tijdvakken beschouwd als geldig voor de vaststelling van de prestaties waarin is voorzien bij de algemene regeling voor Argentinië en bij de algemene regeling voor werknemers voor België.

Artikel 12

Berekening van de prestaties

1. Wanneer de persoon voldoet aan de voorwaarden die bij de wetgeving van een van beide overeenkomstsluitende Staten zijn vereist om recht te hebben op de prestaties zonder te moeten overgaan tot samentelling, berekent de bevoegde instelling van de betrokken Staat het recht op de prestatie rechtstreeks op basis van de in deze overeenkomstsluitende Staat vervulde verzekeringstijdvakken en enkel ingevolge de eigen wetgeving.

Deze instelling berekent ook het bedrag van de prestatie dat zou bekomen worden na toepassing van de regels voorzien in paragraaf 2 van dit artikel. Enkel het hoogste bedrag wordt weerhouden.

Wat België betreft, is deze paragraaf enkel van toepassing op de ouderdoms- en overlevingsprestaties.

2. Indien een persoon aanspraak kan maken op een prestatie waarvan het recht enkel is ontstaan ingevolge de samentelling van de verzekeringstijdvakken vervuld overeenkomstig artikel 11, zijn de volgende regels van toepassing:

- a) de betrokken bevoegde instelling berekent het theoretisch bedrag van de prestatie die verschuldigd zou zijn indien alle verzekeringstijdvakken vervuld krachtens de wetgevingen van beide overeenkomstsluitende Staten enkel zouden vervuld zijn geweest overeenkomstig de wetgeving die ze toepast;

- b) de betrokken bevoegde instelling berekent vervolgens het verschuldigd bedrag, op basis van het bedrag bedoeld in littera a), naar verhouding van de duur van de verzekeringstijdvakken enkel vervuld volgens haar wetgeving tot de duur van alle verzekeringstijdvakken samengeteld krachtens littera a).

3. Het feit alleen dat deze Overeenkomst op hem van toepassing is, kan niet leiden tot de vermindering van de rechten van de betrokkene.

Artikel 13 Bepaling van de invaliditeit

1. Voor de bepaling van de vermindering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de toekenning van de overeenkomstige invaliditeitsprestaties, voert de bevoegde instelling van elk van de overeenkomstsluitende Staten haar evaluatie uit overeenkomstig de wetgeving die ze toepast.
2. Voor de toepassing van de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel stelt de bevoegde instelling van de overeenkomstsluitende Staat op het grondgebied waarvan de aanvrager woont de medische verslagen en documenten die ze in haar bezit heeft op aanvraag gratis ter beschikking van de bevoegde instelling van de andere Staat.
3. Op aanvraag van de bevoegde instelling van de overeenkomstsluitende Staat wiens wetgeving wordt toegepast, voert de bevoegde instelling van de overeenkomstsluitende Staat op het grondgebied waarvan de aanvrager woont, de nodige medische onderzoeken uit voor de evaluatie van de situatie van de aanvrager. De medische onderzoeken die uitsluitend van belang zijn voor de eerstgenoemde instelling worden volledig door deze instelling ten laste genomen, volgens de regels vastgesteld in de administratieve schikking voorzien in artikel 19.

Artikel 14 Herberekening van de prestaties

1. Indien wegens de verhoging van de kosten voor levensonderhoud, wegens de variatie van het loonpeil of om andere aanpassingsredenen de ouderdoms-, overlevings- of invaliditeitsuitkeringen van één van de overeenkomstsluitende Staten worden gewijzigd met een bepaald percentage of bedrag, moet de andere overeenkomstsluitende Staat niet overgaan tot een herberekening van de ouderdoms-, overlevings- of invaliditeitsuitkeringen.
2. Daarentegen, in geval van verandering van de wijze van vaststelling of van de berekeningsregels van de ouderdoms-, overlevings- of invaliditeitsuitkeringen, worden de uitkeringen opnieuw berekend overeenkomstig Artikel 12 of 16.

Hoofdstuk 2
Toepassing Van de Belgische Wetgeving

Artikel 15

Voor het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op invaliditeitsprestaties zijn de bepalingen van artikel 11 naar analogie van toepassing.

Artikel 16

1. Indien het recht op Belgische invaliditeitsprestaties enkel ontstaat door samentelling van de verzekeringstijdvakken van Argentinië en van België vervuld overeenkomstig artikel 15, wordt het bedrag van de verschuldigde prestatie vastgesteld volgens de modaliteiten bepaald bij artikel 12, paragraaf 2.

2. Wanneer het recht op de Belgische invaliditeitsprestaties ontstaat zonder dat een beroep moet worden gedaan op de bepalingen van artikel 15, en het bedrag opgeleverd door de samentelling van de Argentijnse prestatie met de Belgische prestatie berekend volgens paragraaf 1 van dit artikel, kleiner is dan het bedrag van de prestatie verschuldigd op basis van enkel de Belgische wetgeving, kent de Belgische bevoegde instelling een supplement toe, dat gelijk is aan het verschil tussen de som van beide voormelde prestaties en het bedrag verschuldigd krachtens enkel de Belgische wetgeving.

Artikel 17

Niettegenstaande de bepalingen van artikel 15, is er, in de gevallen bedoeld in artikel 16, paragraaf 1, geen enkele invaliditeitsprestatie verschuldigd door België wanneer de verzekeringstijdvakken vervuld overeenkomstig de Belgische wetgeving vóór de realisatie van het risico in hun geheel geen jaar bereiken.

Artikel 18

In afwijking van artikel 5 van deze Overeenkomst blijft de rechthebbende op een invaliditeitsprestatie van de Belgische wetgeving verder deze prestatie genieten tijdens een tijdelijk verblijf in de andere Staat wanneer dit tijdelijk verblijf vooraf werd toegestaan door de Belgische bevoegde instelling. Deze toelating kan evenwel enkel worden geweigerd wanneer het tijdelijk verblijf plaatsheeft in de periode tijdens dewelke de Belgische bevoegde instelling krachtens de Belgische wetgeving de invaliditeitstoestand moet evalueren of herzien.

TITEL IV
Diverse Bepalingen

Artikel 19
Taken van de bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten:

- a) nemen bij administratieve schikking de nodige maatregelen voor de toepassing van deze Overeenkomst en duiden de verbindingsorganen en de bevoegde instellingen aan;
- b) leggen de procedures van administratieve samenwerking vast alsook de betalingsmodaliteiten voor de kosten voor geneeskundige, administratieve en andere getuigschriften die noodzakelijk zijn voor de toepassing van deze Overeenkomst;
- c) verstrekken elkaar rechtstreeks alle inlichtingen met betrekking tot de ter uitvoering van deze Overeenkomst getroffen maatregelen;
- d) verstrekken elkaar rechtstreeks en zo spoedig mogelijk alle wijzigingen van hun wetgeving die van aard zijn invloed te hebben op de toepassing van deze Overeenkomst.

Artikel 20
Administratieve samenwerking

1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst bieden de bevoegde autoriteiten en de bevoegde instellingen van elk van beide overeenkomstsluitende Staten elkaar hun goede diensten aan, als gold het de toepassing van hun eigen wetgeving. Deze onderlinge samenwerking is in principe kosteloos; de bevoegde autoriteiten kunnen evenwel overeenkomen bepaalde kosten te vergoeden.
2. Het voordeel van de vrijstellingen of verminderingen van taksen, zegel-, griffie- of registratierechten, bepaald bij de wetgeving van een van beide overeenkomstsluitende Staten voor de stukken of documenten die bij toepassing van de wetgeving van deze Staat moeten overgelegd worden, wordt verruimd tot gelijkaardige voor de toepassing van de wetgeving van de andere Staat over te leggen stukken en documenten.
3. Alle voor de toepassing van deze Overeenkomst over te leggen akten en documenten worden vrijgesteld van het geldigverklaringsvisum van de diplomatieke of consulaire overheden.
4. Voor de toepassing van deze Overeenkomst zijn de bevoegde autoriteiten en de verbindingsorganen van de overeenkomstsluitende Staten ertoe gemachtigd rechtstreeks met elkaar te corresponderen. Het corresponderen mag geschieden in een van de officiële talen van de overeenkomstsluitende Staten.

Artikel 21
Uitwisseling van persoonlijke gegevens

1. De instellingen van de beide overeenkomstsluitende Staten zijn gemachtigd om voor de toepassing van deze overeenkomst persoonlijke gegevens uit te wisselen, met inbegrip van gegevens met betrekking tot het inkomen van de personen, die de instelling van een overeenkomstsluitende Staat nodig heeft voor de toepassing van een wetgeving inzake sociale zekerheid of sociale bijstand.
2. Bij het meedelen van persoonlijke gegevens door de instelling van een overeenkomstsluitende Staat dient de wetgeving inzake bescherming van gegevens van deze overeenkomstsluitende Staat te worden nageleefd.
3. Op de bewaring, de verwerking en de verspreiding van persoonlijke gegevens door de instelling van de overeenkomstsluitende Staat waaraan ze worden meegedeeld, is de wetgeving inzake de bescherming van gegevens van deze overeenkomstsluitende Staat van toepassing.
4. De gegevens bedoeld in dit artikel mogen voor geen andere doelen worden gebruikt dan de toepassing van een wetgeving inzake sociale zekerheid of sociale bijstand.

Artikel 22
Aanvragen, verklaringen en rechtsmiddelen

Aanvragen, verklaringen of rechtsmiddelen die, krachtens de wetgeving van een overeenkomstsluitende Staat, binnen een bepaalde termijn hadden moeten ingediend worden bij een autoriteit, orgaan of rechtscollege van deze Staat, zijn ontvankelijk indien zij binnen dezelfde termijn worden ingediend bij een autoriteit, orgaan of rechtscollege van de andere overeenkomstsluitende Staat. In dit geval laat de/het aldus aangezochte autoriteit, orgaan of rechtscollege deze aanvragen, verklaringen of rechtsmiddelen onverwijld worden aan de autoriteit, het orgaan of het rechtscollege van de eerste overeenkomstsluitende Staat, ofwel rechtstreeks ofwel door toedoen van de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten. De datum waarop deze aanvragen, verklaringen of rechtsmiddelen werden ingediend bij een autoriteit, een orgaan of een rechtscollege van de andere overeenkomstsluitende Staat wordt beschouwd als datum van indiening bij de/het ten deze bevoegde autoriteit, orgaan of rechtscollege dat bevoegd is om er kennis van te nemen.

Een aanvraag of een document mag niet van de hand worden gewezen omdat ze opgesteld zijn in een officiële taal van de andere overeenkomstsluitende Staat.

Artikel 23
Uitbetaling van de prestaties

De uitbetalingsinstellingen van prestaties ingevolge deze Overeenkomst kunnen er zich geldig van kwijten in de munt van hun Staat.

Overdrachten ingevolge de toepassing van deze Overeenkomst worden verricht overeenkomstig de tussen beide overeenkomstsluitende Staten ter zake van kracht zijnde akkoorden.

De bepalingen van de wetgeving van een overeenkomstsluitende Staat inzake controle op de wisseloperaties mogen geen belemmering zijn voor de vrije overdracht van geldbedragen ingevolge de toepassing van deze Overeenkomst.

Artikel 24 Bijleggen van geschillen

Geschillen over de interpretatie en de uitvoering van deze Overeenkomst zullen in de mate van het mogelijke geregeld worden door de bevoegde autoriteiten.

Artikel 25 Procedures tot uitvoering

1. De uitvoerbare beslissingen uitgesproken door een rechtbank van een van de overeenkomstsluitende Staten, evenals de uitvoerbare akten van de autoriteit of de instelling van een van de overeenkomstsluitende Staten met betrekking tot bijdragen of heffingen inzake sociale zekerheid en andere verzoeken, inzonderheid voor de terugvordering van onverschuldigde prestaties, worden erkend op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat.
2. De erkenning kan slechts worden geweigerd wanneer ze onverenigbaar is met de wettelijke beginselen van de overeenkomstsluitende Staat op het grondgebied waarvan de beslissing of akte moet worden uitgevoerd.
3. De procedure tot uitvoering van de onherroepelijk geworden beslissingen en akten moet in overeenstemming zijn met de wetgeving van de overeenkomstsluitende Staat op het grondgebied waarvan de uitvoering plaatsvindt die de uitvoering van dergelijke beslissingen en akten regelt. De beslissing of akte dient vergezeld te zijn van een attest dat de afdwingbaarheid ervan bevestigt.
4. De verschuldigde bijdragen en heffingen hebben, in het kader van een procedure tot uitvoering, faillissement of gedwongen vereffening op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, dezelfde graad van voorrang als de overeenkomstige schuldvorderingen op het grondgebied van deze overeenkomstsluitende Staat.
5. De schuldvorderingen die het voorwerp moeten zijn van een terugvordering of een gedwongen terugvordering zijn beschermd met dezelfde waarborgen en voorrechten als vorderingen van dezelfde aard van een instelling die gelegen is op het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staat waarop de terugvordering of de gedwongen terugvordering geschiedt.

Artikel 26
Terugvordering van niet-verschuldigde betalingen

Wanneer de instelling van één van de Staten aan een rechthebbende op uitkeringen een groter bedrag heeft uitbetaald dan waarop hij recht heeft, kan deze instelling, op de wijze en binnen de grenzen als bepaald in de wetgeving die ze toepast, aan de instelling van de andere Staat die uitkeringen aan deze rechthebbende verschuldigd is, vragen om het te veel betaalde bedrag in te houden op de bedragen die ze aan bedoelde rechthebbende betaalt. Laatstgenoemde instelling houdt het bedrag in op de wijze en binnen de grenzen als voor een dergelijke schuldvergelijking is bepaald bij de wetgeving die ze toepast alsof het door deze instelling zelf te veel betaalde bedragen betreft en maakt het ingehouden bedrag over aan de crediteurstelling.

Artikel 27
Samenwerking inzake fraudebestrijding

Naast de toepassing van de algemene principes inzake administratieve samenwerking, zullen de bevoegde autoriteiten in een administratieve schikking regels overeenkomen volgens welke ze hun medewerking verlenen aan de bestrijding van fraude inzake socialezekerheidsbijdragen en -prestaties die de grenzen van een overeenkomstsluitende Staat overschrijdt, in het bijzonder wat de werkelijke woonplaats van de personen, de raming van het inkomen, de berekening van de bijdragen en het cumuleren van prestaties betreft.

TITEL V
Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 28
Gebeurtenissen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst

1. Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór zij van kracht werd.
2. Deze Overeenkomst doet geen recht ontstaan op de betaling van prestaties voor een tijdvak dat aan haar inwerkingtreding voorafgaat.
3. Ieder verzekeringstijdvak dat onder de wetgeving van een van de overeenkomstsluitende Staten werd vervuld vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst wordt in aanmerking genomen voor het vaststellen van het recht op een overeenkomstig de bepalingen van voormelde Overeenkomst toegekende prestatie.
4. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op rechten die werden vastgesteld door toekenning van een forfaitaire uitkering of door terugbetaling van bijdragen.

Artikel 29
Herziening, verjaring, verval

1. Elke prestatie die niet werd vereffend of die werd geschorst wegens de nationaliteit van de belanghebbende of wegens diens woonplaats op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat dan die waar de uitbetalingsinstelling zich bevindt, wordt, op verzoek van de belanghebbende, vereffend of hervat met ingang van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.
2. De rechten van de belanghebbenden die vóór de inwerkingtreding van voormelde Overeenkomst de vaststelling van een pensioen of een rente hebben verkregen, worden op hun verzoek herzien, rekening gehouden met de bepalingen van voormelde Overeenkomst. In geen geval mag dergelijke herziening als gevolg hebben dat de vroegere rechten van de belanghebbenden verminderd worden.
3. Ingeval het verzoek bedoeld in paragraaf 1 of 2 van dit artikel wordt ingediend binnen een termijn van twee jaar ingaand op de datum dat deze Overeenkomst van kracht wordt, zijn de overeenkomstig de bepalingen van voormelde Overeenkomst verkregen rechten verworven met ingang van deze datum, zonder dat de bepalingen van de wetgeving van de ene of van de andere overeenkomstsluitende Staat betreffende het verval of de verjaring van rechten, tegen belanghebbende mogen ingeroepen worden.
4. Ingeval het verzoek bedoeld in paragraaf 1 of 2 van dit artikel wordt ingediend na het verstrijken van een termijn van twee jaar ingaand op de datum dat deze Overeenkomst van kracht wordt, worden de rechten die vervallen noch verjaard zijn slechts verkregen vanaf de datum van het verzoek, onder voorbehoud van gunstigere bepalingen in de wetgeving van de betrokken overeenkomstsluitende Staat.

Artikel 30
Duur

Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door één van de overeenkomstsluitende Staten door middel van een schriftelijke kennisgeving die via diplomatieke weg aan de andere overeenkomstsluitende Staat wordt bezorgd, met een opzeggingstermijn van twaalf maanden.

Artikel 31
Waarborg voor verworven rechten of rechten in wording

In geval van opzegging van deze Overeenkomst worden de rechten op en de uitkeringen van prestaties verworven krachtens voormelde Overeenkomst gehandhaafd. De overeenkomstsluitende Staten nemen de nodige schikkingen met betrekking tot de rechten in wording.

Artikel 32
Inwerkingtreding

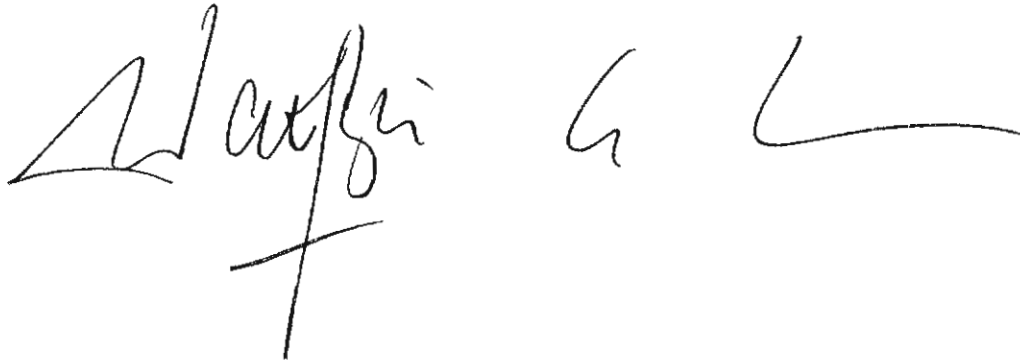
Deze Overeenkomst zal bekrachtigd worden overeenkomstig de interne wetgeving van elk van de overeenkomstsluitende Staten. Ze treedt in werking de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum waarop de beide overeenkomstsluitende Staten via diplomatieke weg de bekrachtigingsinstrumenten hebben uitgewisseld.

Ten blijk daarvan de behoorlijk daartoe gemachtigden deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Buenos Aires, op 3 maart 2010, in tweevoud, in de Spaanse, Franse en Nederlandse taal, de drie teksten zijnde gelijkelijk rechtsgeldig.

Voor de Republiek Argentinië,

Voor het Koninkrijk België,

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the Republic of Argentina, written in dark ink. The signature on the right is for the Kingdom of Belgium, also written in dark ink. Both signatures are positioned below their respective text labels.